

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

En los autos RIT 99-2021 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se dictó el uno de diciembre de dos mil veintiuno, sentencia por la cual **se absolvió** a **MATIAS ENRIQUE KRSTULOVIC CARREÑO**, de los cargos que le formulara el Ministerio Público como autor del delito consumado de **tenencia ilegal de arma de fuego**, acaecidos supuestamente con fecha 10 de noviembre del 2020, en la comuna de Las Condes.

En contra de la referida sentencia, el Ministerio Público dedujo recurso de nulidad, el que fue declarado admisible, procediéndose a su vista el día 8 de febrero del año en curso, oportunidad en que alegaron los abogados en representación del recurrente y de la defensa.

Se fijó como fecha para la lectura de la sentencia el día de hoy.

Considerando y oídos los intervinientes:

1º) Que como se dijo, el Ministerio Público dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia que absolvió al acusado de ser autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, el que se fundó de forma principal en la causal de nulidad prevista en la letra e) del artículo 374, con relación al artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, al infringir las exigencias de valoración y fundamentación establecida en el artículo 297 del mismo cuerpo legal, en particular, vulnerar el principio lógico de la razón suficiente y, en forma subsidiaria en la causal del artículo 373 B) del Código Procesal Penal, por cuanto, en el pronunciamiento de la sentencia, se ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

I.- De la causal principal:

2º) Que en concepto del Ministerio Público la sentencia infringe las normas de valoración de la prueba, al vulnerar el principio de razón suficiente.

Refiere que la sentencia recurrida, en su motivo décimo señala las razones por las cuales absuelve al acusado, e indica que si bien éste se encontraba en poder de la escopeta incautada, creyó que el arma estaba inscrita a nombre de su padre fallecido y que no regularizar la situación solo arriesgaba una infracción administrativa de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 5 inciso 12 de la Ley de Armas, por lo que, en concepto de los jueces *“Este error fáctico por parte del encartado implica necesariamente la no concurrencia de dolo en su acción, toda vez que no existió por su parte la voluntad de ejecutar los elementos típicos del delito de tenencia ilegal de arma de fuego al haber creído que se encontraba en una situación que, a lo sumo, podía ser castigada con una multa administrativa al no haber regularizado la situación de la “escopeta de su padre”. Luego, no existiendo dolo en el caso concreto, y no estando el delito de tenencia ilegal de*



arma de fuego considerado como uno de aquellos que puede ser castigado a título de culpa o negligencia, necesariamente habrá que absolver al imputado.”.

3°) Que de conformidad con lo anterior, el Ministerio Público afirma que pese a la determinación de la ocurrencia del tipo penal de tenencia ilegal de arma de fuego del artículo 9° de la ley 17.798, el Tribunal estima la concurrencia de un error (al parecer de prohibición), por lo cual procede a dictar sentencia absolutoria en favor del acusado. Lo anterior de conformidad con los antecedentes reunidos con la prueba rendida, pero fuera del marco de las alegaciones efectuadas por los intervinientes, y basado en los propios dichos del acusado, junto con elementos de prueba aportados por la defensa, los que buscaban acreditar que la tenencia del arma era anterior a la modificación del tipo penal efectuada por la ley 20.813.

Así se señala que con el objeto de acreditar su pretensión el Ministerio Público rindió prueba testimonial (testigos), documental y otros medios de prueba, que son expuestos en el considerando séptimo. En particular, hace referencia a diversas declaraciones y reproducciones de audios de interceptaciones telefónicas, autorizadas judicialmente, dentro de las cuales el propio imputado demuestra su conocimiento sobre la necesidad de inscripción de armas de fuego y que dan cuenta de su pleno conocimiento de mantener un arma que no se encuentra inscrita, lo que no solo vulnera la norma, si no que la lógica de la ley de control de armas y el mandato constitucional señalado anteriormente.

Luego, también se da cuenta de una conversación del propio acusado con un sujeto apodado Roro, donde el acusado solicita adquirir un “fierro” que no esté inscrito, es decir, manifiesta un pleno conocimiento entre la diferencia de un arma inscrita de aquella que no se encuentra inscrita.

Posteriormente, se reproduce otro audio de una interceptación telefónica, donde el acusado adquiere un arma de fuego a un particular, incluyendo tres cañones, uno de ellos sin pasar por el banco de pruebas y conversa sobre los requisitos para inscribir legalmente esa arma, cuando la compra se realiza entre particulares.

Además, en el juicio, tanto por medio de la declaración del propio acusado, como a través del informe de la Dirección General de Movilización Nacional, se demuestra que en los últimos dos años, el imputado había adquirido tres armas de



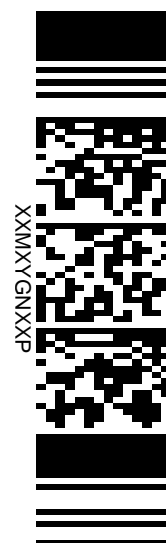
fuego, con conocimiento pleno de cómo se deben inscribir, para así poder poseer ese número de armas, de acuerdo a lo que regula el reglamento de la ley de control de armas.

Por lo anterior, el Tribunal argumenta su tesis de absolución dando relevancia a circunstancias ventiladas en el juicio oral que carecen de aquella característica para determinar la culpabilidad del imputado, planteando como elementos para absolver, cuestiones accesorias al núcleo fáctico de la imputación, no valorando ni haciéndose cargo de la prueba del Ministerio Público, solo indicándola, omitiendo su valor como información relevante aportada durante el juicio. Enseguida el tribunal estima que existiría un error en la conducta del imputado por lo que no podría ser punible.

En definitiva, el Ministerio Público sostiene que el Tribunal no ha entregado un razonamiento fundado en conclusiones adecuadamente deducidas de la prueba sometida a su conocimiento y valoración, incurriendo en la infracción señalada haciendo presente que el proceso de evaluación de la prueba conforme a las reglas de inferencia requiere señalar en cada caso las relaciones lógicas que se producen del hecho establecido por la prueba directa y los establecidos por la prueba de referencia y la indiciaria o secundaria, sin la debida referencia lógica a la prueba directa lo que, en su concepto, importa una verdadera falta de valoración de la misma.

4°) Finalmente, el Ministerio Público señala que la infracción denunciada trae aparejado un evidente perjuicio al ente persecutor y a la sociedad toda, cual es la absolución del acusado a pesar de encontrarse suficientemente acreditado tanto la existencia del delito investigado como la participación del acusado en calidad de autor. El error señalado ciertamente ha influido en la decisión a la que arriba el tribunal, error que puede salvarse únicamente con la nulidad del fallo y consecuentemente del juicio del cual ella emana.

5°) Que el artículo 374 del Código Procesal Penal, prescribe como motivo absoluto de nulidad el que la sentencia omita, entre otros, el requisito de la letra c) del artículo 342, este último en relación al artículo 297. Conforme a ello, y al tenor del recurso, corresponde examinar si el fallo impugnado en la valoración que hizo de la prueba respetó la lógica, en especial el principio de razón suficiente, de acuerdo al cual todo tiene una



explicación suficiente para ser así; si se hizo cargo de toda la prueba rendida y si indicó los medios de prueba conforme a los cuales dio por probados los hechos y circunstancias que estableció, permitiendo con su fundamentación reproducir el razonamiento que utilizó para llegar a sus conclusiones.

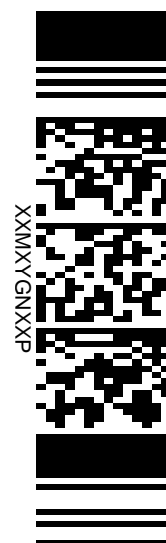
En consecuencia, no se trata simplemente de discrepar del razonamiento efectuado, sino de revisar si éste se hizo acorde a las normas de valoración de la prueba y si se encuentra fundamentado en los medios de prueba aportados al juicio.

6º) Que el Ministerio Público, en su oportunidad, acusó al imputado como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9 inciso 1º de la Ley N° 17.798 en relación con el artículo 2º del mismo cuerpo legal, en grado de ejecución consumado, correspondiéndole al imputado una participación en calidad de autor del artículo 15 n°1 del Código Penal.

7º) Que la sentencia impugnada, en su motivación octava estableció como hechos acreditados los siguientes: *“Que el día 10 de noviembre del 2020, funcionarios de la PDI, valiéndose de una autorización judicial de entrada y registro, hicieron ingreso al domicilio ubicado en Avenida Américo Vespucio N° 435, Edificio B, Departamento 01, Las Condes, domicilio del acusado Matías Krstulovic Carreño; encontrando en el interior, al acusado en posesión y tenencia de una escopeta marca Winchester calibre 12, modelo 1500 XTR N° de serie NX011631, la cual se encontraba registrada a nombre de José Alejandro Sepúlveda Sepúlveda, cédula de identidad N°523.163-9, fallecido el año 1986.”.*

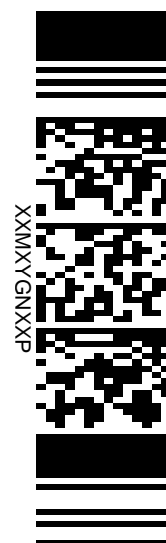
8º) Que en relación al elemento subjetivo del tipo penal imputado al acusado, esto es al dolo, la sentencia, luego de señalar y ponderar la prueba aportada por la defensa, estableció lo siguiente:

“Todos estos antecedentes resultan suficientes, al parecer de estos sentenciadores, para poder dar por acreditado que el imputado efectivamente mantenía el convencimiento de que la escopeta Winchester era de su padre y que nunca tuvo motivos para pensar que pudiera estar inscrita a nombre de otra persona que no fuera él. Parece razonable que si un individuo ve en su hogar un arma desde toda su vida y durante décadas la utiliza su padre para cazar, al igual que él y aquellos cercanos a quienes se les presta el arma,



este sujeto pueda asumir que el arma efectivamente pertenece a su hogar, ya que siempre han sido ellos quienes la han utilizado y se han comportado como dueños de la misma. Del mismo modo resulta razonable que dicho individuo no haya revisado la inscripción del arma, ya que nunca tuvo ningún motivo para sospechar que esta podría tener algún problema”.

Luego se añadió: “Que, esta errónea representación de la realidad influye de modo categórico en la determinación de si nos encontramos o no ante un delito. Como se arguyó por el Ministerio Público, el imputado, ya sea por su profesión o por su afición, tenía conocimientos respecto de la ley de Control de Armas. Así queda demostrado del hecho de que tiene tres armas debidamente inscritas -lo que se acreditó con el “Informe consulta de Control de Armas y explosivos relativo a Matías Enrique Krstulovic Carreño”, rotulada como C) N°2 en el auto de apertura y de los audios en los que explica el proceso de inscripción de armas de fuego en la Pista N°8 del Disco 1, rotulado como D) N°9 en el mismo documento), por lo que se puede establecer que el imputado conocía lo dispuesto en el artículo 5° inciso 12 de la ley 17.798 que establece que “En caso de fallecimiento de un poseedor o tenedor de arma de fuego inscrita, el heredero, legatario o la persona que tenga la custodia de ésta u ocupe el inmueble en el que el causante estaba autorizado para mantenerla, o aquél en que efectivamente ella se encuentre, deberá comunicar a la autoridad contralora la circunstancia del fallecimiento y la individualización del heredero, legatario o persona que, bajo su responsabilidad, tendrá la posesión provisoria de dicha arma y de sus municiones hasta que sea adjudicada, cedida o transferida a una persona que cumpla con los requisitos para inscribir el arma a su nombre. Si la adjudicación, cesión o transferencia no se hubiere efectuado dentro del plazo de noventa días, contado a partir de la fecha del fallecimiento, el poseedor tendrá la obligación de entregar el arma y sus municiones en una comandancia de guarnición de las Fuerzas Armadas o en una comisaría, subcomisaría o tenencia de Carabineros de Chile. La autoridad contralora procederá a efectuar la entrega a quien exhiba la inscripción, a su nombre, del arma de fuego depositada. La infracción de lo establecido en esta norma será sancionada con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. La posesión provisoria antes señalada no permitirá el uso del arma ni de sus municiones”.



En efecto, el mismo encartado explicó, que tras la muerte de su padre debía hacer la posesión efectiva y regularizar el arma a su nombre. Así las cosas, y creyendo el imputado que la escopeta Winchester objeto de este juicio se encontraba inscrita a nombre de su fallecido padre, el señor KRSTULOVIC creía estar efectivamente en la situación jurídica descrita por la disposición arriba transcrita, en la cual no arriesgaba una sanción penal, sino que una multa de carácter administrativo.”.

9°) Que como se ve, la sentencia levanta la hipótesis, que luego hace suya, de que el imputado producto de un error –creencia que la escopeta incautada estaba inscrita a nombre de su padre- solo arriesgaba una infracción administrativa al no regularizar el arma una vez fallecido su progenitor y que ese error elimina el dolo.

Sin embargo, tal razonamiento extraído de la observación de fotografías antiguas cuyo contexto es explicado por los testigos de la defensa y por lo cuales se intentaría demostrar que el arma de dichas fotos es la misma que fue incautada al acusado, y que habría adquirido su padre desde antiguo y que ello entonces implicaría deducir que el imputado creyó que el arma debía estar inscrita a nombre de su padre, constituye más que una inferencia una simple suposición.

10°) Que en efecto, para los jueces el error en cuanto al nombre de quien estaba inscrita el arma, elimina el dolo en el actuar del acusado, de manera que para sostener un razonamiento lógico, la sentencia debe justificar el establecimiento de ese error con los medios de prueba rendidos por las partes.

Así, en primer término la sentencia acude a la declaración del imputado y dice que *“MATIAS KRSTULOVIC introdujo la información pertinente a la circunstancia subjetiva relativa a la tenencia del arma por parte del imputado, a saber, que este habría actuado bajo el convencimiento de que el arma habría pertenecido a su padre desde que el tenía memoria, sin nunca haber cuestionado la posibilidad de que la escopeta estuviera inscrita a nombre de un tercero”*. Al respecto debe recordarse que sobre el punto en cuestión el acusado declaró: *“Que los funcionarios habrían revisado las armas, estando todas en regla menos la escopeta de su padre que habría estado inscrita a nombre de un señor de apellidos Sepúlveda Sepúlveda quien habría fallecido*



en 1986, agregando que no tenía autorización para mantener la escopeta en su poder.

Relató que él habría conocido la escopeta de toda la vida, que la habría utilizado su padre para cazar y que este se la habría regalado a él en el año 1990, manteniendo su padre el uso de éste excepto cuando el imputado volvía a la casa en los veranos”. Luego agregó: “Que sí conocería a Flavio Giagnoni, sería su primo hermano, que le habría guardado la escopeta en febrero del 2020 mientras armaba su casa en Santiago. Que si recuerda ría (sic) haberle dicho que guardara la escopeta no inscrita, aclarando que se habría referido a que no estaba a nombre de él, pensando que seguía a nombre de su padre.

Indicó que si sabría que las armas hay que inscribirlas. Que en los 30 años nunca se habría dado cuenta que su padre no tenía inscrita la escopeta, agregando que esta la conocería de toda la vida y que siempre habría estado en la casa de su padre. Que es algo que habría dejado pasar”.

Enseguida y en cuanto a las pruebas de la defensa cabe señalar que ésta se valió de tres testigos: Francisco García Huidobro, Carlos Castillo Vásquez y Segundo Castillo Sandoval, todos ellos deponen conocer al acusado desde décadas atrás, y coinciden en señalar que el arma en cuestión fue regalada al acusado por el padre de éste -nada dicen sobre la inscripción de la mencionada arma- limitándose a reconocer las fotografías que se les exhiben en las que afirman que el arma que en ellas aparece es la incautada al acusado.

Finalmente, se rindió prueba pericial, declarando en el juicio el perito fotógrafo Huido Quezada Bravo quien afirma que las fotografías exhibidas por la defensa son de antigua data reconociendo que no es posible identificar el número de serie del arma que aparece en tales fotos.

11°) Que así, cabe preguntarse si la sentencia entrega una razón suficiente para el establecimiento del error que invoca el acusado y lo cierto es que no, pues salvo la declaración de él mismo, el error no encuentra sustento ni en los dichos de los testigos –que solo refieren que el arma fue un obsequio del padre del acusado a éste- ni en las fotografías –que solo mostrarían a personas junto a un arma-.

Es más, tal error se desvanece con las declaraciones del propio imputado captadas mediante escuchas telefónicas en medio de una



investigación por tráfico de armas y que fueron aportadas como prueba por el Ministerio Público, en las que el acusado al hablar con su primo Flavio Gianoni le dice que “guardara la escopeta no inscrita”, sin que la aclaración que ahora el acusado hace al tribunal, en orden a que se refería a que no estaba a su nombre, pensando que seguía a nombre de su padre, aparezca refrendada por otro medio probatorio.

12°) Que de la lectura de la sentencia, aparece como hecho cierto que el arma incautada en poder del acusado y que originó el juicio correspondiente, no se encontraba inscrita a su nombre ni tampoco a nombre de su padre sino de un tercero, hoy fallecido.

Los testigos cuyo testimonio reproduce la sentencia solo mencionan que el padre del acusado regaló a éste una escopeta que sería la misma que aparece en las fotografías, de manera que no existe razón suficiente –dada en la sentencia- que permita inferir de tales testimonios el supuesto error del acusado. Es más, el argumento del error se estrella contra las declaraciones del acusado cuando habla a su primo sobre el arma no inscrita y sobre todo, con los antecedentes de la causa en la que se reproducen diversas escuchas telefónicas al acusado, entre ellas, la del día 11 de febrero del 2020, en la que un tal Ugalde le habría solicitado al encartado que se consiguiera “cuatro fierros sin inscripción” con “esos viejos crack que conoce”, a lo que este habría contestado “ok”, y también se habría registrado una comunicación con un tal “RORO”, quien posteriormente fue identificado como Rodrigo Romero, en donde el imputado le solicita que se consiga un “fierro que ojala no esté inscrito”, aclarándole que prefería un revolver porque no caían las vainillas.

11°) Que de lo expuesto, surgen las interrogantes de si ¿es suficiente la razón que dan los jueces para concluir que el acusado creyó que el arma estaba inscrita a nombre de su padre? Y entonces como esa era su convicción ¿se justifica que creyera que a la muerte del padre, solo debía regularizar administrativamente el arma?. Lo cierto es que no, pues la creencia –errada- que el arma estaba inscrita a nombre del padre no encuentra sustento, salvo en los dichos del propio acusado, según se demostró previamente.

Que así, no resulta suficiente la explicación que los jueces dan para considerar que el error del imputado elimina el dolo en su actuar, más aún,



cuando se soslaya en la sentencia la prueba aportada por el Ministerio Público que da cuenta que el acusado es un oficial de Ejército plenamente conocedor de la Ley de Armas, que conoce a cabalidad las exigencias que el ordenamiento jurídico impone para la tenencia de armas, que hay escuchas telefónicas en que el imputado se refiere al arma en cuestión como “la no inscrita” y que terceros le solicitaban la adquisición de armas no inscritas así como él mismo hizo una petición en tal sentido.

12°) Que el principio de razón suficiente implica, como se sabe, que ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, y en la sentencia impugnada no se da una justificación suficiente para aceptar la creencia errada que esgrime el acusado más aún cuando el fallo omite la valoración de la prueba relevante del Ministerio Público, en especial, de las escuchas telefónicas que dan cuenta del conocimiento que el imputado tiene sobre las armas y sobre la escopeta no inscrita.

13°) Que así, es efectivo que el fallo incurre en la causal de nulidad invocada por el Ministerio Público en forma principal, constituyendo éste un motivo absoluto de nulidad, en la medida que la sentencia violenta la sana crítica al no fundar en forma suficiente, acorde a todos los medios de prueba rendidos en el juicio, el error en el cual sustenta la eliminación del dolo y la decisión de absolución.

14°) Que al acogerse como se hará, la causal de nulidad invocada en forma principal, se hace innecesario analizar la causal subsidiaria de error de derecho, pues por la primera corresponde anular la sentencia y el juicio que le precedió.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 384 y 385 del Código Procesal Penal, **se acoge el recurso de nulidad** deducido por el Ministerio Público en contra de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veintiuno dictada en la causa RIT 99-2021 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que **es nula** como también **el juicio oral** que le antecedió, quedando la causa en estado de fijar una nueva audiencia de juicio.

Devuélvanse los antecedentes a tribunal de base para que disponga lo pertinente con la finalidad de realizar un nuevo juicio oral ante jueces no



inhabilitados.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

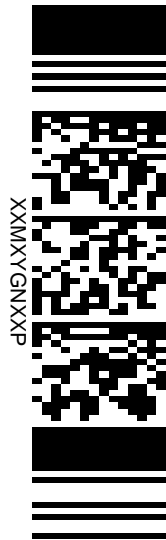
No firma el Abogado Integrante señor Lepin, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 5339-2021



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Mireya Eugenia Lopez M. Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.